



La consulta plantea, la posibilidad de ejercitar los derechos de cancelación y oposición por parte de los solicitantes de adopción al amparo Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

La primera de las cuestiones planteadas, alude al incumplimiento de la obligación de conservación los test de personalidad de los solicitantes, por parte de la consejería en su caso competente. El incumplimiento de una obligación impuesta por una norma, será sancionada por dicha norma. No obstante, no podemos olvidar los principios que rigen el tratamiento de datos de carácter personal, en especial resulta de aplicación el principio de calidad de datos recogido en el artículo 4 de la citada Ley Orgánica el cual reza lo siguiente:

4.1“ Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”

4.2 “ Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se considerarán incompatibles el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o científicos”

4.3 “ Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado.”

Asimismo debemos de señalar que la tramitación de los distintos expedientes declarando la idoneidad o no de los solicitantes, exige la creación del correspondiente fichero por parte de la Conselleria de Benestar de la Generalitat Valenciana, pues atendiendo a la definición de fichero contemplada en artículo 3 b) de la Ley en la que se entiende por fichero “todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso”, esta definición se complementa con lo dispuesto en el artículo 5.1 k) y n) del Real

Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se desarrolla la Ley Orgánica 15/1999.

El artículo 5.1 k) recoge la definición de fichero señalando que lo es “Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, que permita el acceso a los datos con arreglo a criterios determinados, cualquiera que fuera la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso”.

Además según se dispone en la consulta y así consta inscrito en el Registro General de Protección de Datos la Consellería de Valencia tiene inscritos el fichero bajo la denominación “de adopciones”.

A continuación se plantea la posibilidad de ejercitar los derechos de cancelación y rectificación de los informes psicosociales que justifican la denegación de la idoneidad.

El artículo 31.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, define el derecho de cancelación, al señalar que “el ejercicio del derecho de cancelación dará lugar a que se supriman los datos que resulten ser inadecuados o excesivos, sin perjuicio del deber de bloqueo conforme a este Reglamento”. En consecuencia, es preciso analizar si el tratamiento efectuado en el supuesto analizado resulta inadecuado o excesivo, para que procediera atender a la solicitud formulada.

Dicho esto, el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento del afectado, salvo que la Ley disponga lo contrario”. De este modo, dado que el artículo 64 del Decreto 93/2001, de 22 de mayo, dispone que “Podrá solicitar la adopción nacional y/o internacional toda persona física residente en la Comunidad Valenciana que, ostentando capacidad legal para ello y cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa vigente, acepte ser sometida a un estudio sobre sus circunstancias personales, sociales y psicológicas de forma que pueda valorarse su idoneidad para el ejercicio de la patria potestad en la filiación adoptiva, preste su consentimiento a recibir la formación necesaria

para poder ofrecer a un menor la estabilidad, atención y respeto que permitan su desarrollo integral y, en su caso, acepte prestar la colaboración necesaria para realizar los compromisos de seguimiento de la adopción internacional.”, el tratamiento llevado a cabo podría considerarse conforme con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, no siendo el mismo inadecuado o excesivo, por lo que no procedería atender la solicitud de ejercicio del derecho de cancelación.

Sin embargo, es preciso destacar que conforme a lo dispuesto en el artículo 4.5 que señala que “los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados”, en los mismos términos se pronuncia el artículo 8 del Reglamento, a lo que añade “No obstante, podrán conservarse durante el tiempo en que pueda exigirse algún tipo de responsabilidad derivada de una relación u obligación jurídica p de la ejecución de un contrato o de la aplicación de medidas precontractuales solicitadas por el interesado.

Una vez cumplido el período al que se refieren los párrafos anteriores, los datos sólo podrán ser conservados previa disociación de los mismos, sin perjuicio de la obligación de bloqueo prevista, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y en el presente Reglamento”

Ello no obstante, una vez que los datos hayan dejado de ser necesarios para la finalidad para la que se recabaron se cancelarán pero como señala el artículo 16.3 de la Ley Orgánica “la cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión”.

Este precepto, a su vez, se complementa con la previsión contenida en el transcrito artículo 16.5 de la Ley Orgánica 15/1999.

En relación con esta cuestión, ya se indicaba en nuestros informes de 30 de julio de 2004 y 1 de agosto de 2005 lo siguiente:

*“(…) la Ley Orgánica 15/1999 viene regular el bloqueo de los datos de carácter personal en su artículo 16.3, al establecer que “la cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión”.*

*Este precepto, a su vez, se complementa con la previsión contenida en el artículo 16.5 que indica que “los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado”.*

*Del análisis conjunto de las normas citadas se desprende que existirán supuestos en los que si bien deberá procederse a la cancelación de los datos, al haber dejado de ser necesarios para la finalidad que justificó su tratamiento, como sucederá cuando se haya producido la completa consumación del contrato que vincula al responsable del tratamiento con sus clientes, dicha cancelación deberá producirse mediante el bloqueo de los datos de carácter personal sometidos a tratamiento que, produciendo unos efectos similares al borrado físico de los datos, salvo en determinadas circunstancias, descritas por el artículo 16.3 de la Ley Orgánica, no implicará automáticamente ese borrado.*

*Así, el artículo 16.3 viene a reconocer, en consonancia con lo previsto en el artículo 16.5 de la Ley, que existirán determinados supuestos en los que la propia relación jurídica que vincula al afectado con el responsable del fichero y que determina, en definitiva, el tratamiento del dato de carácter personal cuya cancelación se pretende, así como las obligaciones de toda índole que pudieran derivarse de la citada relación jurídica y que aparecen impuestas por la Ley, impedirá que la cancelación se materialice de forma inmediata en un borrado físico de los datos.*



*Por el contrario, el responsable del fichero estará obligado, bien por el contenido de aquella relación jurídica, bien por lo establecido en una norma imperativa, al mantenimiento del dato, si bien sometido a determinadas condiciones que aseguren y garanticen el derecho del afectado a la protección de sus datos de carácter personal, no pudiendo disponer de tales datos en la misma medida en que podría hacerlo en caso de que no procediera (de oficio –por haber dejado de ser necesarios para el cumplimiento de la finalidad del fichero- o a solicitud del afectado) la cancelación de los mismos.*

*En cuanto a las causas que podrán motivar la conservación del dato, sujeto a su previo bloqueo, y al margen de la relación jurídica con el afectado, a la que se refiere el artículo 16.5 de la Ley Orgánica 15/1999, éstas deberán fundarse en lo dispuesto “en las disposiciones aplicables” o a la “atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento”, tal y como prevé la meritada Ley.*

*En este sentido, para la determinación del período de bloqueo de los datos debe tenerse en cuenta que la Sentencia del tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, viene a imponer, expresamente, el principio de reserva de Ley en cuanto a las limitaciones al derecho fundamental de protección de datos de carácter personal, de forma que cualquier limitación a ese derecho (como sería la derivada del artículo 16.3 de la Ley) deberá constar en una disposición con rango de Ley para que el bloqueo de los datos pueda considerarse lícitamente efectuado. Así, a título de ejemplo, podría considerarse que el bloqueo habrá de efectuarse durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación jurídica que funda el tratamiento, en los términos previstos por la legislación civil o mercantil que resulte de aplicación, así como el plazo de cuatro años de prescripción de las deudas tributarias, en cuanto los datos puedan revestir trascendencia desde el punto de vista tributario (habida cuenta de la obligación de conservación que impone el artículo 111 de la Ley General Tributarias y el plazo legal de prescripción de cuatro años previsto en el artículo 24 de la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes).*

*En todo caso, debe recordarse que el mantenimiento del dato bloqueado, supone una excepción al borrado físico del mismo que, en definitiva, es el fin último de la cancelación (tal y como prevé el propio artículo 16.3, al indicar que “cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión”).*

*En consecuencia, a nuestro juicio, la cancelación no supone automáticamente en todo caso un borrado o supresión físico de los datos, sino que puede determinar, en caso de que así lo establezca una norma con rango de Ley o se desprenda de la propia relación jurídica que vincula al responsable del fichero con el afectado (y que motiva el propio tratamiento), el bloqueo de los datos sometidos a tratamiento.*

*En lo atinente a la determinación de los períodos en que el dato habrá de permanecer bloqueado, en relación con lo dispuesto en el artículo 16.3, resulta imposible establecer una enumeración taxativa de los mismos, debiendo, fundamentalmente, tenerse en cuenta, como ya se ha indicado con anterioridad, los plazos de prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la relación jurídica que vincula al consultante con su cliente, así como los derivados de la normativa tributaria o el plazo de prescripción de tres años, previsto en el artículo 47.1 de la propia Ley Orgánica 15/1999 en relación con las conductas constitutivas de infracción muy grave.*

*Por último, en cuanto al modo de llevar a cabo el bloqueo, deberá efectuarse de forma tal que no sea posible el acceso a los datos por parte del personal que tuviera habitualmente tal acceso, por ejemplo, el personal que preste sus servicios en el centro consultante, limitándose el acceso a una persona con la máxima responsabilidad y en virtud de la existencia de un requerimiento judicial o administrativo a tal efecto. De este modo, pese a permanecer el tratamiento de los datos, el acceso a los mismos quedaría enteramente restringido a las personas a las que se ha hecho referencia.”*

En consecuencia, la Consellería deberá proceder a la cancelación (en forma de bloqueo en los supuestos que se han señalado) de los datos de los solicitantes con los que no mantenga relación alguna.

Respecto al derecho de rectificación, como señala el artículo 31 del Reglamento “El derecho de rectificación es el derecho del afectado a que se modifiquen los datos que resulten inexactos o incompletos”, continua estableciendo el artículo 32 que “la solicitud de rectificación deberá de indicar a qué dato se refiere y la corrección que hay de realizarse y deberá de ir acompañada de la documentación justificativa de lo solicitado”, por lo que para que se proceda a la rectificación en el supuesto planteado los solicitantes deberán de cumplir el mandato contenido en el precepto anteriormente transcrito.

Por último se plantea la posibilidad de impugnar la valoración, al amparo del artículo 13 de la Ley Orgánica 15/1999, artículo que se encuentra desarrollado en el artículo 36 del Reglamento bajo la rúbrica “Derecho de oposición a las decisiones basadas únicamente en un tratamiento automatizado de datos”.

Es por ello, que en el supuesto planteado en la consulta, sólo procederá la oposición o impugnación a las valoraciones que resulten de la cumplimentación del test de personalidad, dado que es el único tratamiento automatizado de datos, en todo el proceso para declarar la idoneidad del adoptante. Así el mencionado artículo dispone que “Los interesados tienen derecho a no verse sometidos a una decisión con efectos jurídicos sobre ellos o que les afecte de manera significativa, que se base únicamente en un tratamiento automatizado de datos destinado a evaluar determinados aspectos de su personalidad, tales como su rendimiento laboral, crédito, fiabilidad o conducta.

2. No obstante, los afectados podrán verse sometidos a una de las decisiones contempladas en el apartado 1 cuando dicha decisión:

a) Se haya adoptado en el marco de la celebración o ejecución de un contrato a petición del interesado, siempre que se le otorgue la posibilidad de



alegar lo que estimara pertinente, a fin de defender su derecho o interés. En todo caso, el responsable del fichero deberá informar previamente al afectado, de forma clara y precisa, de que se adoptarán decisiones con las características señaladas en el apartado 1 y cancelará los datos en caso de que no llegue a celebrarse finalmente el contrato.

b) Esté autorizada por una norma con rango de Ley que establezca medidas que garanticen el interés legítimo del interesado.”

El propio artículo 36, prevé dos excepciones a la hora de ejercitar el derecho de oposición, la primera resulta aplicable al supuesto de hecho mencionado en la consulta, pues el artículo 64 del Decreto antes transcrito exige “acepte ser sometida a un estudio sobre sus circunstancias personales, sociales y psicológicas de forma que pueda valorarse su idoneidad para el ejercicio de la patria potestad en la filiación adoptiva, preste su consentimiento a recibir la formación”.

En consecuencia, dado que el solicitante ha otorgado su consentimiento al tratamiento automatizado de sus datos derivado del test, puede alegar lo que estime conveniente en defensa de su derecho o interés, pero sólo respecto de los resultados de dicho test y no del resto del procedimiento.